



PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE: 02/2021-PSO-CG

DENUNCIADO: Nueva Alianza Guanajuato

AUTORIDAD SUSTANCIADORA: Unidad Técnica
Jurídica y de lo Contencioso Electoral

AUTORIDAD RESOLUTORA: Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato; a veinte de octubre de dos mil veintiuno.

Resolución mediante la cual se **declara la inexistencia** de la infracción atribuida a Nueva Alianza Guanajuato, consistente en la indebida afiliación de la ciudadana **María Cristina Basaldúa Jiménez**, atento a lo que prevén los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 443, numeral 1, inciso a), de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*; 2, numeral 1, inciso b) y 25, numeral 1, incisos a), e), q), de la *Ley General de Partidos Políticos*.

GLOSARIO:

<i>Comisión de Quejas y Denuncias:</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Consejo General:</i>	Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Instituto:</i>	Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>INE:</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley electoral local:</i>	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato

<i>LGIPE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Ley de partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>Na GTO:</i>	<i>Nueva Alianza Guanajuato.</i>
<i>Reglamento de quejas y denuncias:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTJCE:</i>	Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

ANTECEDENTES:

- 1. Oficio INE/DEPP/DE/DPPF/1912/2021.** El catorce de enero de dos mil veintiuno, se recibió a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE), el oficio INE/DEPP/DE/DPPF/1912/2021, mediante el cual el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos políticos del *INE*, solicitó al *Instituto* notificar a *Na GTO* el escrito firmado por la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez en fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en que solicitó su baja del padrón de personas militantes y afiliadas al referido instituto político, manifestando que nunca fue su voluntad o su interés formar parte de su militancia.

Lo anterior, para que *Na GTO* realizara lo conducente respecto a la cancelación de la afiliación de la ciudadana antes mencionada.

- 2. Notificación.** El quince de enero de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo solicitado en el oficio INE/DEPP/DE/DPPF/1912/2021, el personal de la *UTJCE* notificó dicho comunicado y sus anexos a la representante suplente ante el *Consejo General* de *Na GTO*.
- 3. Admisión.** El veinte de enero de dos mil veintiuno, la *UTJCE* emitió un auto en que, considerando que los hechos que fueron puestos en conocimiento de dicha autoridad mediante el oficio INE/DEPP/DE/DPPF/1912/2021, constituyen una

presunta violación al derecho de libre afiliación, y en consecuencia, una probable infracción a la normatividad electoral por parte de *Na GTO*, radicó y admitió el procedimiento sancionador ordinario que nos ocupa, asignándole el número de expediente 02/2021-PSO-CG.

Asimismo, en dicho auto se ordenó iniciar la investigación correspondiente, notificar a la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez y emplazar a *Na GTO* para que diera contestación a la imputación formulada en su contra por la *UTJCE*.

4. Diligencias de investigación. En diverso auto emitido el veinte de enero de dos mil veintiuno por la *UTJCE*, se ordenó requerir a *Na GTO*, a efecto de que rindiera información sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento.

5. Emplazamiento a *Na GTO* y notificación a la ciudadana. En cumplimiento a lo ordenado en el auto del veinte de enero de dos mil veintiuno, el día veintidós del referido mes y año se emplazó a *Na GTO* a este procedimiento, tal como se hizo constar en las constancias glosadas a fojas 15'a 19 del expediente.

Por otra parte, el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se notificó a la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez, el auto emitido el día veinte del referido mes y año por la *UTJCE*, tal como se hizo constar en las constancias glosadas a fojas 41 a 45 del expediente.

6. Cumplimiento a requerimiento. Mediante el oficio CDE-034/2021, recibido el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el Presidente del Comité de Dirección Estatal de *Na GTO* dio contestación al requerimiento formulado por la *UTJCE*, mediante el auto referido en el antecedente **4**.

A dicho escrito se adjuntó el original del documento denominado «SOLICITUD DE AFILIACIÓN» fechado el seis de marzo de dos mil diecisiete; el original del documento denominado «MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD» fechado el seis de marzo de dos mil diecisiete; copia simple de credencial para votar de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez; y original del oficio CDE-0033/2021 de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno suscrito por el Coordinador Ejecutivo Estatal Político Electoral de *Na GTO*.

7. Escrito de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez. En fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno se recibió en la Oficialía de Partes del *Instituto* el escrito signado por María Cristina Basaldúa Jiménez, mediante el cual manifiesta desistirse «de la demanda y de la acción» intentada en contra de Na GTO y ser consciente de su afiliación voluntaria y libre a dicho partido político, deslindando a éste de violar su derecho de libre afiliación.

8. Contestación a emplazamiento. Mediante oficio CDE-036/2021, recibido en la Oficialía de Partes del *Instituto* el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el Comité de Dirección Estatal de *Na GTO*, dio contestación a la imputación realizada en este procedimiento.

Al escrito referido se adjuntó copia simple del documento denominado «SOLICITUD DE AFILIACIÓN» fechado el seis de marzo de dos mil diecisiete; copia simple del documento denominado «MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD» fechado el seis de marzo de dos mil diecisiete; copia simple de credencial para votar de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez; original del oficio CDE-0033/2021 de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno suscrito por el Coordinador Ejecutivo Estatal Político Electoral de *Na GTO*; y original del oficio CDE-035/2021 de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Presidente de la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información de *Na GTO*.

9. Cierre de instrucción. Mediante auto de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, la *UTJCE* tuvo a *Na GTO* dando contestación a la imputación formulada en su contra, se admitieron las pruebas documentas que se adjuntaron al oficio CDE-036/2021, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente a la vista de *Na GTO* para que en el plazo de cinco días hábiles realizara las manifestaciones y alegaciones que a su derecho convinieran.

10. Certificación. El diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el secretario habilitado dentro del procedimiento sancionador ordinario que nos ocupa, emitió certificación en que hizo constar el cómputo del plazo otorgado a *Na GTO* para que rindiera alegatos, así como que no se presentó, dentro del mismo, escrito alguno en que se hiciera manifestación alguna por parte de dicho instituto político.

11.Elaboración del proyecto de resolución. Mediante auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente a este procedimiento sancionador ordinario.

12.Remisión del proyecto de resolución a la *Comisión de Quejas y Denuncias*. Mediante el oficio UTJCE/3160/2021, signado por el titular de la *UTJCE*, el catorce de octubre de dos mil veintiuno, se remitió a la *Comisión de Quejas y Denuncias*, el proyecto de resolución del expediente 02/2021-PSO-CG. Lo anterior con motivo de la excesiva carga de trabajo que ha debido atender por parte de la *UTJCE*, con motivo del proceso electoral local ordinario 2020-2021.

13.Aprobación del proyecto de resolución por la *Comisión de Quejas y Denuncias*. Mediante la sesión extraordinaria del quince de octubre de dos mil veintiuno, la *Comisión de Quejas y Denuncias* aprobó el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 02/2021-PSO-CG y ordenó su remisión al *Consejo General* para los efectos a que se refiere el último párrafo del artículo 368 de la *ley electoral local*.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este *Consejo General* es competente para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador ordinario. Lo anterior con fundamento en los artículos 369 de la *ley electoral local* y 96 del *reglamento de quejas y denuncias*.

Por otra parte, es importante invocar la jurisprudencia 25/2015,¹ emitida por la *Sala Superior*, cuyo rubro es: «COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES», mediante la cual se determinó que, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada:

- i) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local;

¹ Emitida por la Sala Superior en sesión celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, que puede consultarse en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17.

- ii) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales;
- iii) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y
- iv) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En atención a lo expuesto, este *Consejo General* es competente para resolver el procedimiento sancionador que nos ocupa, pues se actualiza el supuesto señalado en el citado criterio jurisprudencial, consistente en que no corresponde a la autoridad nacional electoral el conocimiento de los hechos presuntamente infractores a la normatividad electoral imputados a *Na GTO*.

Lo anterior, conforme a los *Lineamientos para la verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos locales para la conservación de su registro y su publicidad, así como criterios generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales en posesión de los sujetos obligados*, emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que establecen en su apartado vigésimo sexto, que las quejas o denuncias por afiliación inadecuada por parte de partidos políticos locales se interpondrán ante el organismo público local electoral que corresponda.

SEGUNDO. Procedencia de la vía. Toda vez que los hechos materia de este expediente no corresponden a las conductas previstas por el artículo 370 de la *ley electoral local*, que se tramitan por la vía especial, esto es, no corresponden a conductas que violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la *Constitución* (fracción I); o contravengan las normas sobre propaganda política o electoral (fracción II); o bien, constituyan actos anticipados de precampaña y campaña (fracción III); se concluye que el **procedimiento sancionador ordinario** resultó la vía adecuada para la sustanciación del presente procedimiento, como fue establecido mediante auto del veinte de enero de dos mil veintiuno.

TERCERO. Causas de sobreseimiento. En el presente asunto no se actualiza alguna causa de sobreseimiento prevista en el artículo 365 de la *Ley electoral local*, como se advierte a continuación:

La causal de sobreseimiento que se prevé en la fracción I del artículo 365 de la *Ley electoral local* no se actualiza, ya que durante el trámite del presente procedimiento no se materializó alguna de las causales de improcedencia que contempla el numeral 364 de dicha ley.

La causal de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 364 de la *Ley electoral local* no se actualiza, toda vez que el procedimiento sancionador ordinario que se resuelve no versa sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político.

La hipótesis prevista en la fracción III del artículo 364 de la *Ley electoral local* tampoco se actualiza, toda vez que los hechos imputados a *Na GTO* en este procedimiento ordinario sancionador no han sido materia de otra queja o denuncia en que se haya emitido una resolución por parte de este *Instituto*.

La causal de improcedencia establecida en el artículo 364, fracción IV, de la *Ley electoral local* tampoco se actualiza ya que, conforme a lo señalado en el considerando PRIMERO de esta resolución, esta autoridad sí es competente para conocer y resolver este procedimiento sancionador ordinario.

Por otra parte, *Na GTO* no ha perdido su registro como partido político local, por lo que no se materializa la causa de sobreseimiento que establece el artículo 365, fracción II, de la *Ley electoral local*.

Por último, no se actualiza el supuesto que establece la fracción III del artículo 365 de la *Ley electoral local* para decretar el sobreseimiento de la presente causa, consistente en que se presente desistimiento escrito por parte de la persona denunciante, siempre y cuando se exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución y que no se trate de la imputación de hechos graves ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

Ello, no obstante que en fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno se recibió en la Oficialía de Partes del *Instituto* un escrito firmado por la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez en que manifiesta desistirse de la demanda y de la acción intentada en contra de *Na GTO*; debido a que el procedimiento sancionador ordinario que ahora nos ocupa no inició por una denuncia o queja presentada ante la *UTJCE*

por la ciudadana antes referida, sino que dicha autoridad electoral inició el mismo en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 103, fracción IV, y 361 de la *Ley electoral local*, así como 48 y 69 del *Reglamento de quejas y denuncias*, como consta en auto del veinte de enero del año en curso.

Se considera pertinente tomar en consideración que en la resolución de la contradicción de tesis 14/2006-PL, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocó la definición que, sobre la figura procesal del desistimiento se contiene en la *Enciclopedia Jurídica Mexicana* del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la siguiente: «Acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar la instancia o no continuar con el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado».

Como se advierte, el concepto de desistimiento está vinculado al previo ejercicio de una acción o reclamo de un derecho ante la autoridad competente; lo que, en el caso de los procedimientos sancionadores previstos en la *Ley electoral local*, se realiza mediante la presentación de una queja o denuncia al amparo del principio dispositivo aplicable –al igual que el principio inquisitivo–, al inicio de este tipo de procedimientos.

Así, la validez y efectos jurídicos del desistimiento están condicionados a la disponibilidad del derecho por parte de su titular, así como a que no se ocasionen, con motivo del mismo, afectaciones a terceros o al interés social –conforme al artículo 365, fracción III, de la *Ley electoral local* no es procedente el sobreseimiento en los casos en que se imputen hechos graves o se vulneren los principios rectores de la función electoral–.

La *Sala Superior*, en la resolución de los recursos de apelación SUP-RAP-5/2018 y SUP-RAP-7/2018 acumulados, precisó las principales características de los principios dispositivo e inquisitivo en los procedimientos sancionadores electorales, de la siguiente manera:

«El principio dispositivo se sustenta en dos aspectos principales. El primero, otorga a los interesados la iniciación de la instancia, de determinar los hechos que serán objetos del recurso, o inclusive de disponer del derecho

material controvertido, es decir, la facultad de desistir, y el segundo, le proporciona la atribución de disponer de las pruebas, sin que la autoridad pueda allegarlas de oficio, de manera que las partes tienen la iniciativa en general, y el instructor debe atenerse exclusivamente a la actividad de éstas, sin que le sea permitido incluir hechos que las mismas no narran, tomar iniciativas encaminadas a comenzar o impulsar el procedimiento, ni establecer la materia del mismo o allegarse medios de prueba.

El principio inquisitivo se caracteriza porque el instructor cuenta con la facultad para iniciar, de oficio, el procedimiento, así como la función de investigar la verdad de los hechos por todos los medios legales a su alcance, sin que la inactividad de las partes, lo obligue ni lo limite a decidir únicamente sobre los medios de prueba aportados o solicitados».

De la anterior transcripción, se tiene que con base en el principio dispositivo las personas interesadas cuentan con la posibilidad de iniciar el trámite de una instancia y desistir del derecho hecho valer en la misma; al tiempo en que, con base en el principio inquisitivo, es la autoridad la que se encuentra facultada para iniciar, de oficio, el procedimiento e investigar la verdad sobre los hechos por los medios legales a su alcance.

Tal como se establece en la resolución citada de la *Sala Superior*, ante la probable existencia de una infracción a la normativa electoral, la autoridad está en posibilidad de desplegar su facultad investigadora, con el propósito de averiguar si ha sido vulnerado o no el orden jurídico, esto es, debe indagar y verificar la certeza de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Sin que sea indispensable, para tal efecto, la presentación de una queja o denuncia.

En el caso que nos ocupa, al haberse comunicado a este *Instituto Electoral*, a través del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1912/2021, la probable afiliación indebida de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez, la *UTJCE*, con base en las atribuciones que le han sido legal y reglamentariamente conferidas, inició el procedimiento sancionador ordinario que ahora nos ocupa, sin que la ciudadana antes mencionada se haya constituido en parte quejosa o denunciante.

Por lo tanto, al no haber iniciado este procedimiento por una denuncia o queja presentada por la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez y al no haberse

constituido la misma, en tal virtud, como parte quejosa o denunciante, el desistimiento presentado no resulta eficaz para decretar el sobreseimiento en términos del artículo 365, fracción III, de la *ley electoral local*, así como el artículo 67, fracción III, del *reglamento de quejas y denuncias*.

De acuerdo con lo anterior, al no haberse actualizado alguna causa de sobreseimiento, procede realizar el estudio del fondo del asunto.

CUARTO. Estudio de fondo.

1. Fijación de la materia de la controversia.

Se debe determinar si *Na GTO* afilió de manera indebida, es decir, sin su consentimiento, a la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIE*; y 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y q) de la *Ley de partidos*.

2. Afiliación a partidos políticos.

En la jurisprudencia 61/2002 de rubro: «DERECHO DE ASOCIACIÓN. SUS DIFERENCIAS ESPECÍFICAS EN MATERIA POLÍTICA Y POLÍTICA-ELECTORAL.»², se estableció que el artículo 9o. de la *Constitución* consagra la libertad general de asociación, concebida como un derecho constitucional establecido para las ciudadanas mexicanas y los ciudadanos mexicanos. De este género deriva, como una especie autónoma e independiente, el derecho de asociación política, que tiene su fundamento en el artículo 35 de la propia *Constitución* y por la otra, el derecho de asociación político-electoral, consagrado a su vez en el artículo 41, fracción III, octavo párrafo, de la propia *Constitución*.

Asimismo, en la jurisprudencia 24/2002 de rubro: «DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.»³, la *Sala Superior* precisó que el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41,

² Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 25.

³ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 19 y 20.

fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de la ciudadanía para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas.

Además, conforme a la jurisprudencia en cita el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia.

En particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no **libremente** a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse.

Como corolario de lo anterior, a continuación, se invocan en lo conducente las disposiciones jurídicas cuya contravención se imputó en este procedimiento, a *Na GTO*:

a) Constitución.

«Artículo 6. [...]

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

[...]

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.»

«Artículo 16. [...]

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.»

«**Artículo 35.** [...]

Son derechos del ciudadano:

[...]

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;»

«**Artículo 41.** [...]

I. [...]

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.»

b) LGIPE.

«**Artículo 443.**

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

- a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;»

b) Ley de partidos.

«**Artículo 2.**

1. Son derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes:

[...]

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y»

«Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

[...]

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidaturas;

[...]

q) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;»

De las disposiciones anteriormente invocadas, se advierte, como se señaló en supra líneas, que el derecho de afiliación político-electoral debe ejercerse en forma libre y voluntaria por la ciudadanía, por lo que a *contrariu sensu*, incurrirá en infracción a la normatividad electoral, el partido político que afilie a una persona a su militancia sin contar con su consentimiento.

Si bien, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación político-electoral deviene de disposiciones jurídicas cuyo cumplimiento no se encuentra condicionado al contenido de sus disposiciones internas, con el objeto de clarificar el proceso que debe llevarse a cabo para que ciudadanas y ciudadanos se conviertan en militantes de *Na GTO*, es necesario analizar su normativa estatutaria, misma que se transcribe, en lo conducente:

«Artículo 6.- Nueva Alianza Guanajuato es una organización abierta a todos los ciudadanos y las ciudadanas Guanajuatense que deseen participar en la vida democrática de la Entidad y quieran contribuir con propuestas y esfuerzo al desarrollo de Guanajuato. Los ciudadanos y ciudadanas Guanajuatense podrán integrarse de manera libre, individual y pacífica a Nueva Alianza Guanajuato, bajo dos modalidades: afiliadas y afiliados.»

«**Artículo 7.-** Se considera afiliado o afiliada, a toda persona que de manera individual, libre, voluntaria, personal y pacífica desee afiliarse y cumpla con los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano o ciudadana Guanajuatense;
- b) Encontrarse en pleno goce de sus derechos político-electorales;
- c) Gozar de buena reputación y tener un modo honesto de vivir;
- d) Compartir la ideología partidaria contenida en los Documentos Básicos;
y
- e) Suscribir el formato de solicitud aprobado por la Comisión Estatal de Afiliación y los documentos anexos que especifica el Reglamento de la materia.

Para acreditar la calidad de afiliado o afiliada, la Comisión Estatal de Afiliación de Nueva Alianza Guanajuato expedirá la constancia respectiva en términos del Reglamento que norma la materia.

Para poder formar parte de algún órgano de gobierno partidista en cualquiera de sus niveles, los aspirantes deberán acreditar su calidad de afiliado o afiliada.

Como conclusión de lo expuesto en este apartado, se tiene lo siguiente:

- a) El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos para decidir libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas;
- b) A *Na GTO* podrán afiliarse las ciudadanas y los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse a dicho partido político; y
- c) Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadana o ciudadano en ejercicio de sus derechos, expresar su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse al partido, así como suscribir personalmente la solicitud de alta como militante.

Además de los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona a que se proteja su información privada y datos personales; de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. Pruebas.

En el expediente del procedimiento sancionador ordinario que se resuelve, obran las documentales que enseguida se indican:

Documental pública.

- A)** Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1912/2021, firmado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del *INE*, mediante el cual se solicita notificar a *Na GTO* el escrito mediante el cual la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez solicitó su baja del padrón de personas afiliadas y militantes del referido instituto político (*consultable a fojas 1 y 2 del expediente*).

Probanza que tiene el carácter de documental pública conforme a lo previsto en los artículos 359 y 411, fracción II, de la *ley electoral local*, por haber sido expedida por una autoridad electoral en ejercicio de sus facultades. Por lo tanto, su valor probatorio es pleno.

Documentales privadas.

- A)** Copia fotostática simple del escrito de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez solicitó su baja del padrón de personas afiliadas y militantes de *Na GTO* (*consultable a foja 3 del expediente*).
- B)** Oficio CDE-034/2021 de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, firmado por el Presidente del Comité de Dirección Estatal de *Na GTO*, mediante el cual se dio cumplimiento al requerimiento de información contenido en el auto emitido el día veintidós del referido mes y año (*consultable a fojas 24 a 25 del expediente*).

- C) Documentos que se adjuntaron al oficio CDE-034/2021 suscrito por el Presidente del Comité de Dirección Estatal de *Na GTO*, los cuales consisten en: solicitud de afiliación de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez a *Na GTO* de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete; manifestación bajo protesta de decir verdad de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez fechada el seis de marzo de dos mil diecisiete; y copia de la credencial de elector de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez (*consultables a fojas 26 a 28 del expediente*);
- D) Oficio CDE-033/2021, signado por Hernán René Ángel Bermúdez Coordinador Ejecutivo Estatal de Político Electoral del Comité de Dirección Estatal de *Na GTO*, en el cual informa que, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se realizó con éxito la cancelación de la afiliación de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez a dicho partido político (*documental consultable a foja 29 del expediente*).
- E) Escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, signado por la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez, mediante el cual manifiesta desistirse de la demanda y de la acción intentada en contra de *Na GTO*, pues afirma estar consciente de su afiliación voluntaria y libre a ese partido político, por lo que lo deslinda de violar su derecho de libre afiliación (*consultable a foja 30 del expediente*).
- F) Copia fotostática simple de la credencial para votar de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez (*consultable a foja 31 del expediente*).
- G) Oficio CDE-035/2021 de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, suscrito por la Presidenta de la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información de *Na GTO*, el cual está dirigido a la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez e informa que derivado de la revisión a los archivos de las distintas coordinaciones estatales del partido político en comento, no obra documento alguno o base de datos en que se haga mención del nombre o demás datos personales de la ciudadana en mención.

Las probanzas descritas tienen el carácter de documentales privadas, conforme a lo previsto en el artículo 359 de la *ley electoral local*; cuyo valor probatorio, en principio,

es indiciario, pero podrán hacer prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí.

4. Hechos acreditados.

Antes de proceder a la justipreciación de las pruebas documentales, así como a su confrontación, en su caso, para arribar a la convicción respecto a si se materializaron los hechos imputados a *Na GTO*, se considera necesario exponer algunas consideraciones sobre la carga probatoria que, en este procedimiento, correspondía a dicho partido político.

En primer lugar, se precisa indicar que tal como se establece en la jurisprudencia 21/2013 de rubro: «PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES»⁴, el principio de presunción de inocencia implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.

No obstante, tal principio implica, entre otras cuestiones, la observancia a las reglas referentes a la actividad probatoria, tales como la relativa a la carga de la prueba.

Así las cosas, conforme a la jurisprudencia 3/2019 cuyo rubro es del tenor siguiente: «DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO.»⁵, si una persona denuncia que fue afiliada a un partido político sin su consentimiento, corresponde al partido político la carga de probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de pertenecer al partido político.

⁴ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

⁵ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 12, Número 23, 2019, páginas 17 y 18.

Lo anterior –se señala en la jurisprudencia en comento–, porque quien presenta la denuncia no está obligado a probar un hecho negativo (la ausencia de la voluntad) o la inexistencia de la documental, pues en términos de carga de la prueba no sería objeto de demostración y, en cambio, los partidos políticos tienen el deber de conservar la documentación relativa a las constancias de afiliación de su militancia, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, como la observancia del porcentaje para obtener y mantener su registro como partido político.

Tal criterio fue reiterado por la *Sala Superior* en el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-144/2021, como se advierte enseguida:

«De manera específica, respecto a la afiliación indebida de ciudadanos a un partido por no existir su consentimiento, se observan dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que el que afirma está obligado a probar su dicho, lo que implica que el denunciante tiene, en principio, la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Ahora bien, respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra si una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la **constancia de inscripción** respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político.

Si una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, implícitamente sostiene que no existe la constancia de afiliación atinente.

En tal escenario, la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de la carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.

En consecuencia, la presunción de inocencia no libera al partido político denunciado de las cargas procesales de argumentar y presentar los medios de convicción idóneos que resulten necesarios para su adecuada defensa.

En ese sentido, el criterio de esta Sala Superior ha sido el de considerar que corresponde al partido político la obligación de presentar las pruebas que justifiquen la afiliación de ciudadanos a su padrón de militantes.»

El criterio sostenido por la *Sala Superior* en el precedente judicial invocado es coincidente con la jurisprudencia 3/2019 pero, además, se reitera que la constancia de inscripción es la prueba que de manera idónea demuestra si una persona está afiliada voluntariamente a un partido político, al ser el documento en que se asienta la expresión manifiesta de que una ciudadana o un ciudadano desea pertenecer a un instituto político.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, mediante escrito de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez manifestó que fue indebidamente afiliada –contra su voluntad– a *Na GTO*, señalando en la documental privada que obra en la foja 3 del expediente, que nunca ha sido su voluntad ni interés formar parte del *Na GTO*, renunciando expresamente a cualquier vínculo con el citado partido político.

Lo anterior es coincidente con el contenido del oficio identificado con el número INE/DEPPP/DE/DPPF/1912/2021, al que se asignó valor probatorio pleno y acredita la presentación del escrito de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, así como la manifestación de la ciudadana en el sentido de solicitar su baja y cancelación de datos personales del padrón de personas afiliadas de *Na GTO*. Aunado a ello, en dicho comunicado se indica que se realizó la búsqueda de la ciudadana en mención, encontrándose una coincidencia dentro de los registros válidos del padrón de personas afiliadas al instituto político denunciado.

Al concatenar las pruebas documentales hasta aquí señaladas, se advierte que la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez estuvo afiliada a *Na GTO* y que, en un primer momento, señaló que no había sido de su interés o voluntad afiliarse al mismo.

En este orden de ideas, *Na GTO* tenía la carga procesal de demostrar la afiliación libre y voluntaria de la ciudadana de mérito.

Ahora bien, al contestar la imputación formulada en su contra, *Na Gto* medularmente señaló que la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez solicitó su afiliación, exhibiendo como pruebas de su intención los originales de la solicitud de afiliación en que se aprecia la firma de la ciudadana en comento y de la manifestación bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de requisitos estatutarios, así como copia fotostática simple de la credencial para votar de la persona de mérito.

Empero, los anteriores documentos no merecen valor probatorio para acreditar la afiliación libre y voluntaria de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez a *Na GTO*, al contrastar su contenido con el hecho notorio consistente en la aprobación de la resolución mediante la cual se otorgó el registro a dicho instituto como partido político local que se invoca con fundamento en lo dispuesto en los artículos 358 y 359 de la *ley electoral local*, acorde a los cuales esta autoridad está facultada para invocar hechos notorios en sus resoluciones, aunado a que el valor de las documentales privadas dependerá de que generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Así las cosas, en la sesión extraordinaria celebrada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, este *Consejo General* aprobó la resolución CGIEEG/339/2018, sobre la solicitud de registro como partido político local presentada por las personas integrantes del Comité de Dirección Estatal del otrora partido político nacional Nueva Alianza. En el punto resolutivo PRIMERO de la aludida resolución, se estableció que el registro de *Na GTO* como partido político local surtiría efecto a partir del primero de enero de dos mil diecinueve.

No obstante, en las documentales originales aportadas a este procedimiento sancionador ordinario por *Na GTO*, consistentes en solicitud de afiliación y declaración bajo protesta de decir verdad consultables a fojas 26 y 27 del expediente, se indica como fecha de expedición, en ambos casos, el seis de marzo de dos mil diecisiete –antes del registro del referido instituto político como partido político local– ; siendo el caso que, también en ambos documentos:

- a) Se contiene el emblema de *Na GTO*;
- b) Se citan artículos del «Estatuto de Nueva Alianza Guanajuato»; y

- c) Se citan artículos del «Reglamento para Normar la Integración y Funcionamiento de la Comisión Estatal de Afiliación de Nueva Alianza Guanajuato».

Asimismo, en el documento denominado «SOLICITUD DE AFILIACIÓN», se indica que la ciudadana comparece a solicitar su afiliación al partido «Nueva Alianza Guanajuato»; mientras que en la «MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD» la ciudadana se compromete a «sostener y difundir la ideología y principios establecidos en los Documentos Básicos de Nueva Alianza Guanajuato, así como a acatar las resoluciones que tomen en los términos Estatutarios, los Órganos de Gobierno de Nueva Alianza Guanajuato».

A juicio de esta autoridad, las anteriores circunstancias restan valor probatorio a las documentales privadas de marras, en virtud de que en la fecha que se indica como aquella en que tuvo lugar su expedición, y por ende, la manifestación de la ciudadana de afiliarse al partido político —seis de marzo de dos mil diecisiete— éste no contaba con registro como partido político local con la denominación «Nueva Alianza Guanajuato», sino que existía el partido político nacional denominado «Nueva Alianza».

La resolución CGIEEG/338/2018 se invoca como hecho notorio con base en las disposiciones jurídicas previamente indicadas, así como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: «HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.»⁶ y de la Segunda Sala del referido órgano judicial de rubro: «HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA».⁷

Además, la fecha en que surtió efectos el registro de *Na GTO* como partido político local no fue objeto de controversia en este procedimiento, resultando aplicable, en consecuencia, lo previsto en el artículo 358 de la *ley electoral local*, que establece que solo serán objeto de prueba los hechos controvertidos.

⁶ Novena Época, Pleno, Tesis: P./J. 74/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963.

⁷ Novena Época, Segunda Sala, Tesis: 2a./J. 27/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, página 117.

De las circunstancias que motivan la valoración de las pruebas documentales consistentes en solicitud de afiliación y declaración bajo protesta de decir verdad consultables a fojas 26 y 27 del expediente, se advierten hechos cuyo conocimiento no corresponde a este Consejo General, por lo que se considera necesario dar vista de los mismos a la autoridad competente a fin de que esté en posibilidad de deslindar la responsabilidad legal que, en su caso, corresponda.

No obstante, obra en autos el escrito recibido en la Oficialía de Partes del *Instituto* el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez manifiesta –además del desistimiento de la demanda y de la acción– que está consciente de su afiliación libre y voluntaria al partido político denunciado; siendo ésta una prueba que desvirtúa la imputación realizada en este procedimiento a *Na GTO*.

En este orden de ideas, el contenido de la documental que nos ocupa no se contrapone con elemento convictivo alguno que obre en el expediente distinto a las manifestaciones de la misma ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez, en el sentido de que se le afilió indebidamente; sin embargo, al valorar las pruebas en términos del artículo 359 de la *ley electoral local*, conforme al recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, se genera convicción en cuanto a que dicha afiliación se dio de forma voluntaria, toda vez que el documento en que se hizo tal manifestación se presentó de manera espontánea ante la *UTJCE* y en la misma obra la firma autógrafa de la ciudadana mencionada, sin que pueda advertirse circunstancia alguna que reste credibilidad a su contenido o revele algún vicio en la voluntad al momento de su emisión.

Ello, aunado a que se trata de un documento que no fue objetado en cuanto a su autenticidad, alcance o valor probatorio, conforme a lo previsto en el artículo 63 del *reglamento de quejas y denuncias*. Tampoco obran en el sumario elementos que desvirtúen su eficacia.

Cabe precisar que, si bien, como se mencionó anteriormente, las constancias de afiliación de militantes son las pruebas idóneas para acreditar la afiliación libre y voluntaria de la ciudadanía a los partidos políticos, en la resolución que la *Sala Superior* dictó en el medio de impugnación con número de expediente SUP-RAP-107/2017, estableció que si un partido político no tiene el cuidado de conservar la

constancia que documente una afiliación que dice se llevó a cabo en forma libre y voluntaria, tiene la posibilidad de aportar otros medios de prueba. Este criterio se reiteró, a su vez, en la sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-144/2021.

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 359 de la *ley electoral local*, las documentales consistentes en los oficios CDE-0033/2021 y CDE-035/2021, acreditan que la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez, actualmente no se encuentra inscrita en el padrón de personas afiliadas de *Na GTO*, toda vez que por parte de dicho partido se realizó la cancelación, en el padrón correspondiente, de la referida persona como militante o afiliada a *Na GTO*; aunado a que se hace constar que en el mismo no aparece actualmente su nombre ni el resto de sus datos personales.

En conclusión, se tiene acreditado el hecho de que la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez, solicitó su afiliación, de manera libre y voluntaria, a *Na GTO*; por lo que no se actualiza la presunta indebida afiliación que se imputó al denunciado y éste no actuó en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; y 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y q) de la *Ley de partidos*.

Por ende, *Na GTO* no incurrió en la infracción a la normatividad electoral que le fue imputada en este procedimiento sancionador ordinario, siendo procedente, en consecuencia, declarar su inexistencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emite los siguientes puntos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es competente para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador, según lo razonado en el considerando primero.

SEGUNDO. La vía del procedimiento sancionador por la cual se tramitó el asunto fue la correcta.

TERCERO. Se declara la **inexistencia** de la falta atribuida al partido político Nueva Alianza Guanajuato, relativa a la indebida afiliación de la ciudadana María Cristina Basaldúa Jiménez.

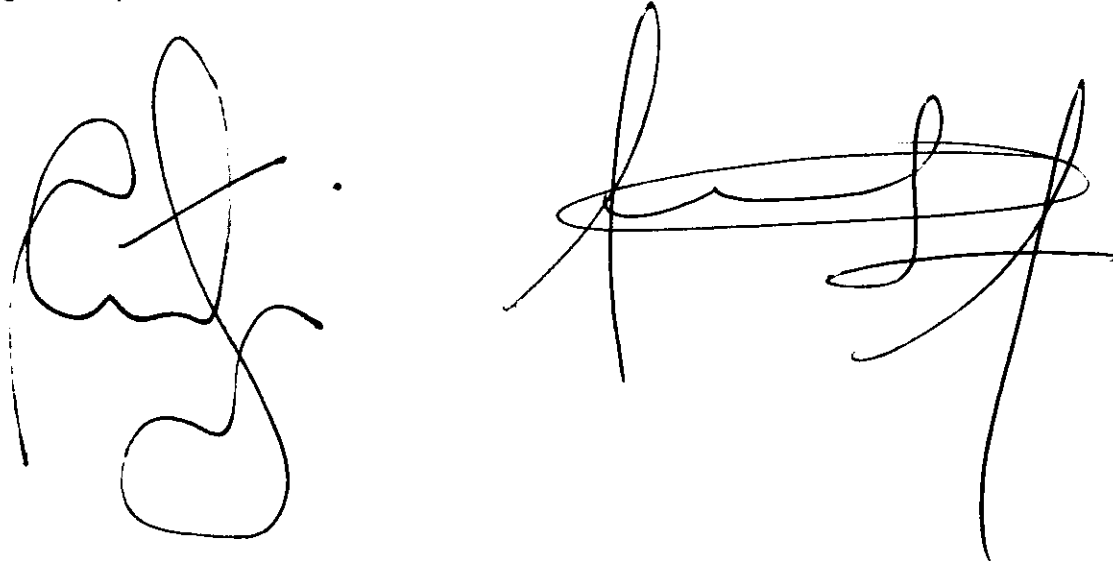
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral dar vista a la autoridad competente para conocer de los hechos que motivaron la valoración de las documentales aportadas a este procedimiento por Nueva Alianza Guanajuato consistentes en la solicitud de afiliación y declaración bajo protesta de decir verdad, consultables a fojas 26 y 27 del expediente.

QUINTO. Notificaciones.

1. **Notifíquese personalmente** a Nueva Alianza Guanajuato a través de quien ostente las funciones de presidencia o por conducto de su representación ante el Consejo General de este Instituto, acompañando copia certificada de la presente resolución para los efectos legales conducentes.
2. **Notifíquese por estrados** para conocimiento de quienes se consideren con algún interés en el presente asunto acompañando copia certificada de la presente resolución para los efectos legales conducentes.

Cúmplase.

Así lo resolvió por unanimidad de votos el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Firman el Presidente Provisional y la Secretaria de este órgano superior de dirección. **-Conste.**

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive script. The signature on the right is also a stylized, cursive script, appearing more elongated and horizontal.